

Crónica del mes

Octubre

El Salvador se encuentra a las puertas de un nuevo evento electoral. Los comicios presidenciales de marzo próximo han condicionado sobremanera la coyuntura que atraviesa el país desde que se cerró el capítulo de las pasadas elecciones legislativas y municipales de inicio del año. Es posible afirmar, a partir de los hechos ocurridos en octubre, que los preparativos del evento que llevará a los salvadoreños a elegir a su presidente y vicepresidente, y la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA), en materia económica, serán los asuntos más relevantes al cierre del año 2003.

El mes de octubre marcó, en el ámbito político, un nuevo enfrentamiento entre dos poderes del Estado, esta vez entre el Ejecutivo y el Judicial, por la discutida aplicabilidad de la Ley Antimaras presentada en julio pasado por el presidente Flores. Como telón de fondo, se daban los movimientos de los principales institutos políticos en la contienda electoral por agenciarse la presidencia de la República en marzo de 2004. ARENA —partido que sortea las mayores preferencias electorales según las encuestas aparecidas a lo largo del mes— ratificó a su candidato, Elías Antonio Saca, un reconocido empresario radial que ha destacado por su buena imagen, pero de quien se ha echado de menos un abordaje de los más urgentes problemas nacionales.

La fórmula presidencial del FMLN —integrada por Schafik Handal y Guillermo Mata Bennet— continuó con su estrategia de visita “casa por casa”, pero no consiguió las mismas simpatías que su principal adversario, debido, en gran parte, a la exitosa campaña arenera y a los yerros propios. El electorado no alcanzó a entender la razón de ser de la fórmula efemelenista: la combinación de un candidato a la presidencia con una vasta trayectoria po-

lítica y un compañero proveniente de las canteras de la lucha social. Aquella no logró volver atractiva su oferta a partir de las ventajas que le saca al designado por ARENA y, por el contrario, terminó cayendo en la trampa de este último, al decantar su campaña hacia el juego de la imagen y no al abordaje de los problemas gruesos del país.

Los partidos PDC y CDU —autodenominados, la opción de centro— trataron de abrirle espacios a su candidato Héctor Silva, quien escogiera como compañera de fórmula a la ex funcionaria de dos gobiernos de ARENA, Ana Cristina Sol. La llegada de la compañera de Silva obedecía a las intenciones de mostrar una opción abierta a las extremas del espectro político y sin caer en ellas, al menos formalmente. Las movidas de Silva —personaje acuerpado por la elite intelectual que reúne a Alberto Arene, Héctor Dada y Rubén Zamora, entre otros— fueron orientadas a distanciarse del proyecto de izquierda del FMLN, dado el traumático acercamiento en el pasado del ex alcalde de San Salvador con la dirigencia ortodoxa efemelenista. Para completar la oferta política, el PCN ratificó a su jefe de fracción legislativa, Rafael Machuca, y al dirigente gremial Genaro Ramírez, para disputarse la silla presidencial, apostando más a la supervivencia dentro del sistema político salvadoreño.

La ejecución del plan mano dura en contra de los pandilleros y la aprobación de la Ley Antimaras del presidente Francisco Flores merecen un capítulo aparte. Con tales medidas, el mandatario y su partido han logrado momentáneamente su principal objetivo: posicionar a ARENA como un partido intollerante con el crimen y atraerse las consiguientes simpatías electorales. Poco ha importado a los apologistas de la mano dura que con ello se lesione la autonomía de los poderes del Estado, al querer imponer una ley que riñe con la Constitución.

En el campo económico, el gobierno salvadoreño centró de nueva cuenta sus energías en la negociación del CAFTA, que ya ha entrado a su fase final. A medida que se acerca el cierre de las negociaciones y la información escasea, la incertidumbre se ha apoderado paulatinamente de algunos sectores centroamericanos que ya se sienten perdedores en el marco del tratado. Tales sectores se han remitido a la insistente e influyente postura de los negociadores norteamericanos. Prueba de ello fue la visita de Robert Zoellick, quien viniera a poner orden en la región, luego del fracaso de la conferencia de la Organización Mundial del Comercio en Cancún y la atrevida postura en la misma de Guatemala y Costa Rica.

Finalmente, en el ámbito doméstico, el Ejecutivo entregó el anteproyecto de Ley de Presupuesto del Estado de 2004, para su correspondiente discusión en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, las primeras proyecciones oficiales en torno al crecimiento de la economía nacional fueron revisadas, disminuyendo el optimismo gubernamental manejado desde el principio del año. El Banco Central de Reserva informaba a finales de octubre que el crecimiento del Producto Interno Bruto para 2003 se estimaba que rondaría por el 2 por ciento, debido a la desaceleración de la economía norteamericana, el deterioro de los términos de intercambio y una menor inversión y producción del sector privado. La misma fuente informaba del sostenido deterioro del sector cafetalero, observado en la disminución de la producción del grano para la actual cosecha —que según estimaciones llegaría a 1.6 millones de quintales, inferior en 4 por ciento a la cosecha del año anterior—. Ya el Consejo Salvadoreño del Café había informado en septiembre que, durante la presente cosecha, el café generaría 133 mil empleos menos que en 2000.

En materia política, ya se ha dicho, la opinión pública fijó su atención en la precampaña electoral montada por los institutos políticos que se disputan la presidencia de la República, en colaboración con las grandes empresas mediáticas; a la par, la repentina aprobación de la Ley Antimaras de Francisco Flores propició un anunciado enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial, llegando a las subidas de tono por parte de los máximos funcionarios de ambas parcelas del Estado. Flores apareció machaconamente en cadenas de televisión, increpando a los jueces para que se plegaran a su iniciativa y aplicaran la normativa aprobada por las fracciones

de ARENA y el PCN en el Parlamento. Como contrapeso, la Corte Suprema de Justicia reclamaba la independencia de los jueces y magistrados, exigiendo del presidente el respeto hacia la institucionalidad jurídica.

El día 2, Francisco Flores empezó con su rosario de mensajes dirigidos a la oposición política. Ante la negativa de las bancadas legislativas del FMLN, PDC, CDU y PCN en aprobar la cuestionada normativa Antimaras, exhortó a los diputados para que aprobasen como delito la mera pertenencia a las maras. “Lamentablemente los partidos de oposición han preferido en insistir en cambios cosméticos que no tienen el peso necesario para hacerle frente a este agudo problema”, señaló Flores en esa oportunidad. Una semana después, el día 9 de octubre, los 43 diputados de ARENA y el PCN votaron para aprobar la Ley Antimaras, tal y como había sido presentada por el Ejecutivo en julio pasado. El FMLN, PDC y CDU no dieron sus votos. “Están batallando por detener la ley, declarándola inconstitucional; pero no nos vamos a detener en nuestra batalla”, aseguró el presidente Flores luego de las primeras reacciones de algunos jueces. Al día siguiente, la normativa de carácter temporal fue publicada en el *Diario Oficial* y entró en vigencia el 11 de octubre.

Las reacciones al entuerto legislativo no se hicieron esperar. Flores y sus hombres de confianza, principales impulsores del plan mano dura y de la Ley Antimaras, reaccionaron complacidos ante el abrupto viraje de sus antiguos aliados legislativos. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General recibieron con satisfacción el aval legislativo, pues se encontrarían facultados para detener e inculpar a quienes consideren, a su discreción, miembros de maras. Ello les permitirá también mejorar su deteriorada imagen por la magia del número: más y más pandilleros capturados, procesados y, si procede, encarcelados. Además, se quitarán de encima, aunque sea momentáneamente, los señalamientos de incapacidad que ha pesado sobre ellos, dejando en manos de los jueces la delicada tarea de aplicar una ley que contradice los preceptos constitucionales.

Otros sectores reaccionaron con cautela. Desde el seno del Ejecutivo, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Salvador Samayoa, siguió manteniendo una postura escéptica ante la moción de su jefe. Con anterioridad, Samayoa había sostenido que la ley pone en aprietos los programas de atención a pandilleros que su institu-

ción y otras tantas realizan. Luego de la aprobación legislativa, tildó de “equivocado” el proyecto Antimaras y vaticinó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial.

Pero Francisco Flores no sólo tuvo roces con el Órgano Judicial. También forcejeó con los diputados de la Asamblea sobre el tema de la exención de las llamadas cuotas voluntarias en las escuelas públicas. El día 17, el mandatario anunció su veto al decreto legislativo emitido el pasado 25 de septiembre, que eximía de aquél pago a los padres de familia. Flores argumentó que con la eliminación de las cuotas desmejoraría la calidad educativa de las escuelas y se pondría en aprietos las finanzas del Ministerio de Educación para el próximo año. “¿De dónde vamos a sacar 100 millones de dólares para suplir las cuotas? Es imposible que el gobierno encuentre esos recursos”, razonó el presidente. Ese mismo día, Flores elogió la inversión social realizada por su gobierno: “Nuestro gobierno ha ejecutado la obra social más grande en la historia de El Salvador. En muchos casos superamos la labor de varios gobiernos juntos. Nuestras metas superan lo que han hecho tres o cuatro gobiernos en el área social”.

Hasta el 20, día en que Flores apareció nuevamente en cadena nacional, el enfrentamiento verbal entre el presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia se hacía más evidente. “Todas las autoridades, aun el presidente de la República, están obligadas a acatar los fallos judiciales”, afirmaba el presidente del máximo tribunal de justicia del país, Agustín García Calderón. Por otro lado, Flores se empeñaba en su iniciativa: “Vamos a luchar hasta superar todos los obstáculos que no ponen los políticos y los jueces que protegen a estos criminales”, respondía a quienes cuestionaban el apego constitucional de la normativa. Flores siguió apelando al populismo que le ha caracterizado en los últimos meses: “A los que han sufrido por las maras, les reconfirmo hoy mi compromiso de poner todo nuestro empeño hasta que caminen tranquilos por las calles”, finalizó.

El 21, fue presentado un equipo ejecutivo de seguimiento a la aplicación de la cuestionada ley. Al mismo fueron invitados los ministros de Defensa, Juan Antonio Martínez; y de Gobernación, Conrado López Andreu; así como el secretario técnico de la Presidencia, Juan José Daboub; el secretario de asuntos jurídicos, Francisco Bertrand Galindo; y el director de la Policía Nacional Civil,

Ricardo Meneses. Daboub, uno de los hombres de confianza de Flores, increpó a los jueces: “Quiero exhortar a los jueces a que cumplan con su función constitucional [...] deben ser humanos”, afirmó. El día 24, la Corte Suprema publicó un comunicado en el que fijaba su posición entorno a las declaraciones de Flores, en el cual reclama la independencia del Poder Judicial, justificando que los jueces y magistrados “son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes”.

Paralelo a la discusión en torno a la aplicabilidad de la Ley Antimaras, la precampaña política se decantaba por insuflar la imagen del candidato oficial, Antonio Saca, en detrimento de sus principales adversarios. Parte de la ya habitual campaña de desprestigio de la prensa de derecha tuvo como objetivo primordial cuestionar la administración municipal efemelenista. Con ello, ese sector de la prensa se llevaba de paso al ex alcalde de San Salvador, Héctor Silva, ahora corriendo por la presidencia bajo la bandera del CDU y la Democracia Cristiana.

Las frases utilizadas por un rotativo nacional hablan al respecto con elocuencia: “[Los alcaldes del FMLN en San Salvador] desaparecieron sin explicación los dineros que los pobres vecinos han venido pagando en concepto de basura, y el centro histórico no es más que un ‘cucarachero’ de dimensiones colosales”, afirmaba el editorialista en la edición de *El Diario de Hoy* del 8 de octubre. El periódico de marras incrementó sus ataques a medida que culminaba el mes, cuestionando la administración edilicia en diversas zonas del país. La andanada de “informes especiales” acusaba de fraude a los antiguos concejos municipales de Sonsonate, Ahuachapán, San Francisco Gotera, Atiquizaya y Concepción de Ataco, todos gobernados por el FMLN hasta junio pasado.

El matutino *La Prensa Gráfica* se unió a la cruzada en contra de las alcaldías efemelenistas del Gran San Salvador. Ese diario reveló parte de los resultados preliminares de una auditoría hecha por la Corte de Cuentas de la República a la sociedad que hicieran las alcaldías del FMLN con la empresa canadiense CINTEC para tratar los desechos sólidos del Área Metropolitana de San Salvador. Pese a la relevancia de la noticia y a la seriedad de las acusaciones, el informe nunca fue oficializado.

El círculo se cerró con el golpe propinado a la izquierda en los sondeos de opinión pública, que

relegaron al candidato del FMLN hasta un tercer lugar, como en el caso de la última encuesta presentada por la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Ya el sondeo de la CID-Gallup daba, a mediados de octubre, una abultada ventaja a ARENA, en intención de voto. ARENA aparecía 11 puntos arriba del FMLN. En torno a las figuras, un 43 por ciento de los entrevistados dijo preferir a Saca y un 24 por ciento a Handal; Silva llegó al 13 por ciento. Por otro lado, los resultados de la encuesta de la UCA, dados a conocer el día 15, arrojaron una preferencia del 48.0 por ciento a Antonio Saca, frente al 16.7 por ciento de su más cercano competidor, Héctor Silva. El candidato de la izquierda aparece relegado a la última posición, con el 14.6 por ciento de las preferencias electorales.

El discurso de Antonio Saca, rayano en la sencillez, llegó con mayor contundencia a la opinión pública. Saca "será un presidente claro, sencillo, sin complicaciones, muy práctico, cercano a la gente, hablando con todos y buscando entendimientos para lograr importantes acuerdos", declaraba el designado oficial en una entrevista periodística publicada el día 6 de octubre. En esa misma tónica, Saca repetía que será "un presidente en contacto permanente con la realidad rural y urbana", durante la ratificación de su candidatura, el día 12. El magistral manejo de la palabra y la imagen ha sido, pues, una de las mayores virtudes del candidato oficial.

El 28 de octubre, los tres principales candidatos a la presidencia expusieron sus propuestas educativas en el marco de un foro organizado por la Universidad Tecnológica. A juzgar por la cobertura de los medios informativos, el tema de la educación pasó repentinamente a ser prioridad en las ofertas políticas. Saca, Handal y Silva coincidieron ese día en que debe incrementarse la inversión pública en educación, si el país quiere obtener resultados satisfactorios en ese rubro en el mediano plazo. Al menos formalmente, coincidieron en que el tema educativo es crucial para alcanzar el desarrollo social, económico y político del país.

Sin embargo, está por conocerse el tratamiento de otros asuntos que han sido políticamente explotados en mayor cuantía, como la salud, la situación socioeconómica y la seguridad pública. Este último, en su dimensión de las maras, ha sido piedra de toque de la embestida electoral del partido en el gobierno, con el consiguiente crecimiento de las intenciones de voto a su favor. El tema de la salud y de la situación económica de los salvado-

reños ha sido igualmente utilizado por la izquierda durante meses atrás, sin causar el mismo impacto que la cruzada antimaras del Ejecutivo.

Las ofertas en el rubro educativo expuestas en el foro, aunque coincidentes en las líneas generales, divergen en los métodos y las recetas. Héctor Silva se centró en el aumento presupuestario del ramo de educación y al fomento del desarrollo científico en las escuelas y centros de enseñanza superior. En esa línea, propuso la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Silva dedicó buena parte de su intervención a poner de relieve la insuficiente inversión pública en el ramo y a la necesidad de incrementar los montos destinados a ese sector.

Schafik Handal ofreció, entre otras cosas, la gratuidad de los servicios de educación, la ampliación de la cobertura educativa, llevar la enseñanza en idiomas a las escuelas públicas y la creación de un Viceministerio de Educación Superior. Handal citó la experiencia de Japón, Corea del Sur y Malasia, países que apostaron a la calidad educativa de sus habitantes para alcanzar el desarrollo económico y social. A pesar de haber criticado la actual gestión educativa basándose en cifras de las Naciones Unidas, el candidato del FMLN no hizo alusiones personales.

Finalmente, el designado por el partido ARENA —el último en intervenir—, avaló los resultados de la reforma educativa emprendida desde mediados de los noventa, señalando además que la inversión debe ir orientada a la modernización del sistema educativo y a la innovación tecnológica. El candidato oficial habló también de intensificar los programas de alfabetización, dar prioridad a la educación media, apoyar la formación docente y reforzar el presupuesto de la Universidad de El Salvador. Saca propuso finalmente la creación de centros tecnológicos, en los que deberán fomentarse las nuevas tecnologías.

El foro fue bien recibido por la opinión pública, aunque, con todo y el encomio que merece, ha sido sólo un incipiente paso que ha obligado a los candidatos a plantear un tema que, según lo que la experiencia dicta, no ha sido del todo privilegiado, por ejemplo, para el partido que en la actualidad controla el Ejecutivo. A los restantes candidatos habrá que darles el beneficio de la duda. El mensaje, pues, es claro: sin bien el foro ha sido un sano ejercicio democrático, habrá que esperar, por parte de los candidatos y los partidos, un tratamiento más minucioso del tema educativo y otros

asuntos públicos, en lo que resta de la campaña política. Habrá que esperar a que aquéllos perfilen y ratifiquen sus propuestas de manera definitiva.

En lo que a la economía concierne, las proyecciones oficiales para el cierre del 2003 no denotaban mayor sobresalto. Destaca únicamente el crecimiento del flujo de las remesas familiares. Según el Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y septiembre del presente año, las exportaciones totales ascendieron a 2,361.5 millones de dólares, incrementándose en 5.7 por ciento en relación con las registradas en el mismo período del año anterior; mientras las importaciones totalizaron 4,306.3 millones de dólares, durante el mismo período.

Las remesas familiares, que contabilizaron 1,535.8 millones de dólares a septiembre de 2003, mantuvieron su tendencia creciente durante todo el año y se espera que acumulen 2,032 millones de dólares a finales de diciembre de 2003, creciendo en 5 por ciento en relación con 2002. Hasta septiembre de este año, el total de las remesas familiares superó el valor de las exportaciones de maquila realizadas hasta agosto, equivaliendo al 64.7 por ciento del valor de las exportaciones totales, al 37.3 por ciento de las importaciones totales y cubren más del 80 por ciento del déficit comercial del país.

Con todo, la discusión en torno al Presupuesto General del Estado para 2004 y el término de las rondas de negociación del CAFTA han sido los asuntos más relevantes en materia económica. En el primer punto, a saber, la asignación presupuestaria a las diferentes carteras de Estado, se especulaba desde el mes de septiembre que el Presupuesto General ascendería a unos 2,793.9 millones de dólares, recursos que serán destinados para "combatir la pobreza, el Plan Mano Dura, el proceso de reconstrucción y cubrir la deuda del antiguo sistema de pensiones", según explicaban, a finales de ese mes, las autoridades de Hacienda. El Ejecutivo recibiría unos 676 millones de dólares, sin contar las carteras de Salud y Educación, que recibirían unos 733.8 millones de dólares. El Poder Judicial ha solicitado 137.2 millones de dólares y el Estado tendrá que desembolsar 301 millones de dólares al antiguo sistema de pensiones. A lo largo del mes de octubre, la Comisión de Hacienda de la Asamblea mantuvo en estudio el Anteproyecto de Ley de Presupuesto para 2004, que fuera entregado al Parlamento desde el 29 de septiembre.

En lo referente al segundo aspecto, el mes iniciaba con la visita del representante comercial de

Estados Unidos, Robert Zoellick a El Salvador, para discutir la agenda de negociación del TLC entre su país y Centroamérica. Zoellick venía de exigir en Costa Rica más apertura en telecomunicaciones, textiles y el sector agrícola. Pero lo que ofrecía como contraparte no terminó de quedar del todo claro. El ministro de Economía salvadoreño, Miguel Lacayo, resume así esta situación: "Hay temas que serán difíciles de negociar de aquí en adelante, pero no es tan simple como decir te doy este billete por este otro". Zoellick había adelantado: "nuestro principio es abrir todos los mercados, y eventualmente estamos dispuestos a negociar nuestros productos sensibles, pero la región también debe hacerlo".

Así, el mes de octubre marchó entre el optimismo gubernamental, los temores de ciertos sectores económicos nacionales y el desconocimiento de la sociedad civil sobre el estado de las negociaciones. Para finalizar el mes, entre el 20 y el 24 de octubre se realizó en Houston, Estados Unidos, la octava ronda de negociaciones, en la que, según la prensa salvadoreña, la región logró consolidar beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, y en el sector industrial y agrícola. Manifestaciones y protestas públicas en San José, San Salvador y Guatemala dieron la bienvenida al inicio de esa ronda.

En definitiva, con la visita de Zoellick —la máxima autoridad en materia de gestión comercial de Estados Unidos—, los negociadores norteamericanos demostraron su intención de asegurar, contra viento y marea, no solamente que el tratado en cuestión se rubrique a la mayor prontitud posible, sino también garantizar, a través de la intimidación y la negociación acelerada, la mayor ventaja posible para sus sectores productivos y comerciales. Las disparidades entre ambas regiones saltan a la vista del observador. Para ilustrar el panorama basta con examinar los sectores productivos tradicionales del Istmo: el agro y la micro y pequeña empresa. Todos se encuentran en el límite de la precariedad y son precisamente los que posibilitan los medios de vida para una buena parte de la población centroamericana. El agro, por ejemplo, representa para Nicaragua el 32 por ciento de su PIB; el 23 por ciento en Guatemala; el 16 por ciento, para Honduras; en Costa Rica, el 11 por ciento; y, en el caso de El Salvador, el 10 por ciento.

Para países como El Salvador, donde el agro se ha derrumbado sistemáticamente por la falta de apoyo gubernamental, debe aclararse que, aún y cuando la participación del sector en el PIB actualmen-

te es apenas la sombra de lo que fue en los ochenta y la primera mitad de los noventa, todavía hay un gran núcleo poblacional que subsiste gracias a este sector. Ese segmento demográfico es el que vive en condiciones de pobreza extrema y relativa. Según datos del Banco Mundial, más del 50 por ciento de la población de la región centroamericana vive en zonas rurales y cerca del 80 por ciento de ellas depende de la agricultura como medio de subsistencia.

La celeridad de la última fase de negociaciones es impresionante. Basta con apreciar la agenda comercial en la cual ha estado inscrito el país todo este año, culminando con las siguientes citas: los jefes de negociación se reunirán en Washington entre el 12 y 13 de noviembre, para avanzar en acuerdos agrícolas y el resto de temas pendientes del TLC. Luego, del 14 al 22 acudirán a las sesiones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Finalmente, durante la semana del 8 al 12 de diciembre, se ha programado la novena y última ronda de negociaciones del CAFTA. El resto del mes sólo se tratarán los términos técnicos, ya que el Tratado debe enviarse al Congreso estadounidense en enero de 2004. Noventa días después, los presidentes de los cinco países centroamericanos y Estados Unidos firmarían el acuerdo, para que sea ratificado en mayo del año próximo.

En lo que a la dinámica política concierne, el mapa electoral aparece ya bastante definido. Por un lado, la sólida ventaja de ARENA sobre el FMLN en la competencia presidencial, no se ha debido tanto a que los tres gobiernos anteriores de aquel partido hayan creado empleo, u ofrecido más oportunidades a la juventud, o ampliado la cobertura y mejorado la calidad de la educación y la salud de manera asombrosa, o reducido el déficit habitacional, o impulsado el agro de tal manera que fuera una de las fortalezas del país en la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, o que hubiera desarrollado la infraestructura nacional, de forma tal que los costos de la producción industrial se hayan reducido como para que los productos salvadoreños fuesen competitivos en los mercados internacionales, sino al éxito de su campaña electoral, centrada en la persecución de las pandillas. El gobierno y el partido de Flores han sabido encontrar una veta muy sensible y la han explotado bien. Mientras que su adversario principal, el FMLN, no ha podido o no ha sabido contrarrestar su impacto.

Hace cuatro meses, el FMLN aparecía 17 puntos por encima de ARENA y ahora se encuentra 19 por debajo, según la encuesta de la UCA. De hecho, la gente percibe que las ofertas más importantes de este partido son rebajar las tarifas de los servicios, poner en circulación el colón otra vez y revertir las privatizaciones. Pero esto no parece ser suficiente, ya que la mayoría piensa que el FMLN no está preparado para gobernar; sólo un poco más de un tercio —de acuerdo al sondeo aludido— lo considera una oportunidad para el cambio. Casi la cuarta parte no votaría por este partido, independientemente de quien sea el candidato, y una mayoría (61 por ciento) se siente lejana a él, frente a un tercio que se considera cercano.

El candidato no contribuye a aumentar los votos a favor del FMLN, en una elección donde, a diferencia de elecciones pasadas similares, aquél es más importante que éste. En buena medida, este cambio es obra de los mismos partidos y sus campañas propagandísticas, que privilegian lo personal sobre lo programático y estructural.

ARENA ha sabido ocultar la crisis económica y social con las maras y ha hecho creer que, con la represión, el país va a mejorar de alguna manera. Ha lanzado una campaña represiva sumamente popular y muy barata, que muestra un gobierno firme y eficaz, comprometido con la seguridad y tranquilidad ciudadanas. Su habilidad ha consistido en enfatizar una fortaleza —la represión— ante un problema social de enormes proporciones, mientras esconde su debilidad mayor, después de quince años en el gobierno. Así, no obstante la insistencia del FMLN en lo económico y social, éstos no son tomados en cuenta por la población a la hora de decidir por qué partido votar. El juicio sobre los partidos y candidatos y la decisión de por quién votar se hacen desde la necesidad inmediata, en buena medida, inducida; aunque también es una actitud con gran arraigo cultural.

El FMLN, en cambio, no ha sabido o no ha podido aprovechar las debilidades de ARENA, de su gobierno y su candidato. Es un partido que no atrae los suficientes votos nuevos como para ganar, sino que sigue descansando en su voto duro. Por eso, está a punto de perder las elecciones presidenciales en la primera vuelta.

En último término, el tono alcanzado por el enfrentamiento entre el presidente Flores y los jueces y magistrados dice mucho del nivel de autori-

tarismo que ha alcanzado el tercer gobierno de ARENA. El presidente Flores reclama con vehemencia que los tres órganos del Estado deben someterse a su voluntad, que es la de un poder que entiende como supremo. En varias ocasiones ha sometido la voluntad de los diputados y luego ha pretendido someter la de jueces y magistrados. Si lo consigue, el presidencialismo habrá alcanzado uno de sus triunfos más sonados, pues el presidente del Poder Ejecutivo se convertirá en el supremo poder.

La Constitución le da mucho poder al Presidente de la República, pero al mismo tiempo le pone los contrapesos de los poderes legislativo y judicial. Sin embargo, al presidente Flores no le parece suficiente y quiere más. No tolera la poca independencia de la cual gozan esos poderes. Como el poder judicial le ha salido respondón, promete no desistir hasta imponerle su voluntad y reinar así sobre la república como poder único y supremo.

El pretexto son las pandillas y una falsa postura ante el dolor de sus víctimas. Alega que, ante la presunta indiferencia de los otros poderes, a él le corresponde salir en su defensa y asegurar que se les haga justicia. La verdad es que los dos gobiernos anteriores de ARENA no se ocuparon nunca de las víctimas y a él le ha tomado cuatro años hacerlo. Y no defiende a todas las víctimas, sino sólo a las de las pandillas. Al parecer, el presidente, sus colaboradores y el director de la policía, un buen día, habrían descubierto la existencia de estas víctimas y su indefensión. Entonces, asumieron su defensa. Por eso, la han emprendido contra los jueces, a quienes presentan como protectores de los criminales y promotores de la impunidad.

De todas maneras, si el presidente Flores ha asumido la defensa de las víctimas, se hubiera asesorado mejor y se hubiera acercado al Órgano Judicial. Pero no está dispuesto a discutir con los jueces, así como no lo estuvo antes a hacerlo con los diputados; tampoco está anuente a participar en diálogos, ni foros de ninguna clase, ni a buscar consensos con nadie, porque para él, eso sería pérdida de tiempo.

Es comprensible que el supremo no encuentre ninguna inconstitucionalidad en la ley que preten-

de imponer, pues ha demostrado desconocer los principios elementales del derecho y se resiste a aprenderlos. No encuentra ilegalidad alguna, porque está acostumbrado a imponer su voluntad y a ser obedecido de inmediato. La ley es el supremo y el supremo, por serlo, no está sometido a ninguna ley, ni puede ser juzgado por nadie, ni, en consecuencia, puede ser desobedecido sin recibir un castigo merecido. Él establece las fronteras de lo permitido y lo prohibido. Él decide quién es honrado y quién es delincuente, quién debe estar encerrado y quién puede circular con libertad.

La voluntad del supremo es impuesta con la colaboración de sus auxiliares, sobre todo de la policía y ahora también del ejército, el cual despliega vehículos militares artillados con armas de grueso calibre para despejar cualquier duda que pudiera surgir en la población sobre dónde está el poder supremo. En la comisión nombrada para vigilar el cumplimiento de su voluntad no están el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ni la comisiónada presidencial para asuntos sociales, ni los ministros de educación y salud, ni ningún representante cualificado del Órgano Judicial, ni la Secretaría Nacional de la Familia, sino que se encuentran el ministro de Hacienda, hombre de confianza del supremo, el abogado de Casa Presidencial, también de confianza, un ministro que asegura representar a las comunidades del país, el ministro de Defensa, a quien le han encargado el operativo militar, y el director de la policía, quien coordina las actividades policiales y militares.

El autoritarismo de Flores contrasta con la ingenua imagen del candidato oficial que corre por la presidencia de la República. Como quiera que sea, a juzgar por los vaivenes de la opinión pública —últimamente muy inestable—, el oficialismo tiene aseguradas sus cuotas de poder en el país, a menos que la izquierda operara un viraje en su estrategia, lo cual es muy dudoso. Entre el cambio y la continuidad, los salvadoreños parecen haber escogido esta última, pues no están dispuestos a arriesgarse a algo que no les da seguridades. Y en esto, aunque sea superficialmente, el partido ARENA ha sabido responder con la suficiente inteligencia política.